



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2023

Vistos los autos: "Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y otros c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 93/171 se presentan la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), el Banco de Valores S.A., el Banco Patagonia S.A., el Banco Deutsche Bank S.A. y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., los cuatro últimos en su carácter de fiduciarios de los fideicomisos financieros especificados en el punto VI.1 del escrito de inicio (fs. 102 vta./108 vta.) -con las salvedades efectuadas a fs. 241/242 vta.- y deducen la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Misiones, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que -según afirman- se encuentran frente a la pretensión fiscal de la demandada de gravar con el impuesto de sellos los contratos de constitución de los referidos fideicomisos.

Explican que el objetivo perseguido mediante la instrumentación de esos contratos es la obtención de liquidez a través de la transferencia de activos -en forma parcial o total- a un fideicomiso financiero, para que emita valores fiduciarios o títulos, en busca de un mercado de inversores al que no se tendría acceso sino por medio de aquella emisión, como consecuencia del proceso denominado "titulización fiduciaria". Agregan que el precio abonado por los valores fiduciarios o

títulos es destinado por el fiduciario a abonar al fiduciante el precio de la cesión de los activos transferidos al fideicomiso.

Señalan que, en el caso de la oferta pública de valores fiduciarios, el procedimiento se realiza en distintas etapas: la constitución del fideicomiso, la transmisión de los bienes fideicomitidos y la colocación y suscripción de los valores fiduciarios.

Destacan que los contratos de constitución de los fideicomisos fueron celebrados todos ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los efectos jurídicos y económicos también se produjeron en dicha jurisdicción.

Dicen que dada la naturaleza de los bienes fideicomitidos, la transmisión se efectúa mediante la cesión fiduciaria de la cartera de créditos o por endoso de los títulos de crédito, de acuerdo a la forma en que se encuentren instrumentados los créditos fideicomitidos.

Sostienen que en la tercera de las etapas indicadas (colocación y suscripción) se realizan diferentes actos que pueden concluir en uno o varios acuerdos de suscripción, así como en ninguno, como consecuencia del procedimiento de colocación de los valores fiduciarios.

En esta tercera etapa -continúan- interviene el colocador, quien -como su nombre lo indica- tiene la función de "colocar" los valores fiduciarios, a cuyos efectos el fiduciario



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

(o en algún supuesto, el fiduciante) le otorga un mandato de venta. El colocador es un banco o una Sociedad de Bolsa, dependiendo de los distintos fideicomisos.

Exponen que una vez obtenida la autorización de oferta pública, el colocador invita a los interesados (operadores y potenciales inversores) a que formulen ofertas de suscripción, a través de los medios habituales del mercado, cumpliendo con los requisitos exigidos en el capítulo VIII de las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Indican que este procedimiento se encuentra regulado por la ley 17.811 y sus normas modificatorias, y por las resoluciones conjuntas n° 470 - 1738/04, 500 - 2222/07 y 521 - 2352/07 de la CNV y la AFIP, respectivamente, y que luego de la publicación comienza a transcurrir el período en el que los interesados deben realizar sus ofertas, que se extiende —como mínimo— a cuatro días hábiles bursátiles.

Expresan que, a los efectos de suscribir valores fiduciarios, los interesados deben formular sus ofertas y suministrar toda aquella información o documentación que el colocador deba o resuelva solicitarles para el ejercicio de su función. Destacan que, entre otras exigencias, debe cumplirse con las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado para el mercado de capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera creada por la ley 25.246.

Ponen de resalto que la oferta no crea vinculación alguna, pues el colocador se reserva el derecho a rechazar cualquier oferta cuando quien desee suscribir no cumpliera con ciertos requisitos, pues la asignación de valores fiduciarios se realiza mediante el "sistema holandés", es decir que se colocan entre aquellos inversores que ofertan una tasa menor o igual, o un precio superior o igual, a la tasa de corte o al precio de corte, respectivamente, que se determine como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento.

Es por ello que -según aducen- solamente luego de finalizado el período de colocación, de comunicado a los interesados el precio de suscripción y las cantidades asignadas, y de pagados los valores fiduciarios por parte de los inversores cuyas ofertas de suscripción fueron adjudicadas, se pueden considerar perfeccionadas tales ofertas.

Aclaran que, en todo caso, fruto de la colocación, podría surgir un acuerdo con cada suscriptor, una vez que el colocador acepte la oferta y el suscriptor pague el precio de los valores fiduciarios adjudicados, pero tal situación debería examinarse en cada caso concreto. Sin perjuicio de lo expuesto, adelantan que los referidos acuerdos se celebrarían como típicos contratos entre ausentes, pues habría un consentimiento tácito de acuerdo a lo previsto en el artículo 1146 del Código Civil entonces vigente.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Manifiestan que la pretensión provincial fue exteriorizada mediante las intimaciones que les fueron cursadas a fin de que tributen el impuesto de sellos correspondiente a los contratos de constitución de los fideicomisos financieros indicados, tomando como base presunta del impuesto el 2,66% del valor fiduciario, proporción que -a criterio del fisco local- representaba la cantidad de habitantes existente en la provincia de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el INDEC (2001), sobre el total de la población de la República Argentina, en virtud de la potencial suscripción que podría existir en la provincia.

Negaron que, en los distintos pasos que concluyeron con la oferta pública de los valores fiduciarios emitidos por los fideicomisos financieros mencionados, hayan existido contratos onerosos e instrumentos celebrados o con efectos en la Provincia de Misiones, arguyendo que la pretensión provincial afecta la seguridad jurídica, la estabilidad y la eficiencia de las transacciones, la protección y el trato igualitario del público inversor.

En síntesis, sostienen que el tributo pretendido viola las leyes nacionales 17.811 del Régimen de Oferta Pública, 21.526 de Entidades Financieras y 24.144 que establece la Carta Orgánica del Banco Central, el decreto nacional 677/2001 complementario y modificatorio de la primera, y los arts. 1°, 4°, 9°, 14, 17, 19, 28, 33, 42, 75 incisos 2°, 3°, 13, 18, 19 y 22, y 126 de la Constitución Nacional.

Por último, peticionan que se dicte una medida cautelar por la cual se ordene a la demandada que se abstenga de ejecutar el impuesto de sellos pretendido sobre los contratos de constitución de los fideicomisos financieros indicados, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos.

II) A fs. 277 este Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa e hizo lugar a la cautelar solicitada con los alcances allí indicados.

III) A fs. 302/339 se presenta la Provincia de Misiones, opone las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva. Asimismo, cuestiona la procedencia formal de la acción declarativa por considerar que no existía una real incertidumbre, y en tanto se encontraba en trámite en sede administrativa local el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, en cuyo marco las actoras interpusieron los recursos de reconsideración y apelación. En subsidio, contesta la demanda.

Con relación al fondo de la cuestión, sostiene que su reclamo se limita a los fideicomisos financieros, definidos en el artículo 19 de la ley 24.441, cuyos certificados de participación y título de deuda son "títulos valores" y han sido objeto de una "oferta pública".

Explica que en la exposición de motivos de la ley 17.811 -que regulaba la oferta pública de títulos valores- se establecía la necesaria autorización del Poder Ejecutivo



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Nacional para llevar adelante este tipo de operaciones, toda vez que estos títulos constituían "una parte del mercado mobiliario argentino, concebido como una unidad para el territorio de la República", ya que afectaba al comercio interprovincial.

Por ende, dice, el fideicomiso financiero no es un instrumento exento de pago del impuesto de sellos, no es una "simple cesión" sino un "negocio" y, como tal, tributa el impuesto en cuestión.

Por otro lado, esgrime que los contratos de constitución de los fideicomisos, cuya sujeción al tributo aquí se cuestiona, producen "efectos" en la Provincia de Misiones, en los términos exigidos por la ley del gravamen, pues la oferta pública se extiende a todo el territorio del país, incluyendo a la provincia demandada.

Puntualiza que la Dirección General de Rentas limitó la base imponible de la forma más equitativa posible, esto es, tomando el 2,66% que representa la población de la provincia sobre el total nacional según el censo del INDEC disponible a la fecha de la liquidación.

Arguye que los fideicomisos financieros con oferta pública tienen la necesaria y legal obligación de configurarse en etapas que, indefectiblemente, deben cumplirse hasta la colocación final de los certificados de participación y/o títulos de deuda. Pone de resalto que la oferta pública no puede ser entendida como una etapa aislada de las anteriores, sino que

constituye un elemento necesario para el cumplimiento de los efectos del fideicomiso, esto es la colocación de los títulos en todo el país.

Recuerda también que es requisito esencial del impuesto de sellos que los instrumentos se refieran a actos, contratos u operaciones onerosas. Afirma que, en el caso de los fideicomisos financieros, es evidente que la onerosidad o la posibilidad de apreciación económica se encuentra presente, ya que los bienes son cedidos con el fin de "securitizarlos", es decir, como garantía de los títulos representativos de deuda o certificados de participación con cuyo producido se pagarán los bienes cedidos por el fiduciante.

Por último, señala que la gravabilidad de los contratos de constitución se encuentra prevista desde el momento de su firma, pues en sus cláusulas se establece que no debe tributar impuesto de sellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que, en caso de instrumentarse la transferencia de títulos en otras jurisdicciones, podría corresponder su pago.

Finalmente, sostiene que la controversia le es común a la Dirección General de Rentas de la Provincia, por lo que solicita se la cite como tercero en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ofrece prueba y pide que se rechace la demanda, con costas.

IV) Corridos los pertinentes traslados de las excepciones opuestas y del pedido de citación de tercero, las





## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

actoras los contestaron a fs. 345/350, y a fs. 358 el Tribunal las rechazó, así como también la citación del tercero requerida, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal a fs. 353 y lo resuelto a fs. 277.

V) A fs. 609/612 dictamina nuevamente la señora Procuradora Fiscal y a fs. 618 obra el llamado de autos para sentencia.

### Considerando:

1º) Que de conformidad con lo decidido a fs. 277 y fs. 358, este juicio es de la competencia originaria de esta Corte (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2º) Que la acción deducida constituye la vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, ya que se encuentran reunidos los recaudos previstos en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Es sabido que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un "caso" constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 310:606 y 310:977; 311:421, entre otros).

A la luz de lo expuesto, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la percepción del impuesto de sellos que la actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, las intimaciones de pago y la restante documental descriptas por las actoras en los puntos VI.3 y XII de su demanda (fs. 113/119 y 155/169), evidencian que la actividad desplegada por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, precedentemente citados, entre otros).

3°) Que no es un obstáculo la existencia de vías recursivas previstas en la legislación provincial, habida cuenta de que la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya fuente directa es la Constitución Nacional, no está subordinada al cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes locales, ni al agotamiento de trámites administrativos de igual naturaleza (conf. Fallos: 340:1480).

4°) Que, en cuanto al fondo del asunto, la cuestión planteada es sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por este Tribunal en la causa CSJ 692/2010(46-A)/CS1 "Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y otros c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia de la fecha -votos concurrentes-, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Hacer lugar a la demanda



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

seguida contra la Provincia de Misiones y declarar la improcedencia de la pretensión fiscal de la demandada plasmada en las intimaciones de pago y en las actuaciones administrativas individualizadas en los apartados XII.2.3.1, XII.2.3.2 y XII.2.4 de fs. 158 vta./169 -con las salvedades efectuadas a fs. 241/242-. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Parte actora: **Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A.; Banco Deutsche Bank S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.**, representados por el **Dr. Lucas Aníbal Piaggio**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Felicitas María Argüello**.

Parte demandada: **Provincia de Misiones**, representada por el **Fiscal de Estado, Dr. Fidel Eduardo Duarte** y por los **Procuradores Fiscales, Dres. Carlos Adrián Núñez, Jorge Alejandro Rojas, Ángela Paula Souza Alexandre, Luis Carlos Oudin y Marlene Gladys Terlecki**.